



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta Nro. 38

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: LILIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA
Demandado: PORVENIR S.A.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ
Radicado N°: 05360-31-05-002-2018-00302-01 (20-162)

En Medellín, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en su carácter de Magistrado Sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **CARLOS JORGE RUÍZ BOTERO**, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de sentencia, procede a decidir el recurso de apelación propuesto por PORVENIR S.A., dentro del proceso ordinario instaurado por **LÍLIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA** en contra de **PORVENIR S.A.**, radicado bajo el n.º 05360-31-05-002-2018-00302-01 (20-162).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente,

SENTENCIA

1. ANTECEDENTES

Mediante vocero judicial la señora LILIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA persigue el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas del 08 de marzo de 2006 al 04 de septiembre de 2017, de manera subsidiaria, la indexación, lo ultra y extra petita, y las costas procesales, con fundamento en que mediante sentencia del 14 de agosto de 2008 se condenó a la demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la actora a partir del 08 de noviembre de 2005, y a descontar del retroactivo la suma de \$ 30.630.089 que había recibido por concepto de devolución de saldos; que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín mediante sentencia del 23 de marzo de 2010; no

obstante. se interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue desatado a través de sentencia del 10 de agosto de 2016, en la que se decidió no casar la sentencia del Tribunal, decisión que fue notificada por edicto el 11 de enero de 2017, y remitido el expediente al Tribunal el 31 de enero de 2017; que una vez fijado las costas del proceso por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, se formuló el 14 de agosto de 2014 demanda ejecutiva en contra de PORVENIR S.A. para el reconocimiento de las obligaciones materia de condena señaladas en la sentencia en firme dentro del proceso ordinario laboral, así como el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el no pago oportuno de la pensión; que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí admitió la demanda ejecutiva y libró mandamiento de pago por las mesadas pensionales y las costas, más no por los intereses moratorios, razón por la que, fue recurrida la decisión y el Tribunal Superior de Medellín mediante decisión del 08 de agosto de 2018 confirmó la decisión de primera instancia, indicando que los intereses debían tramitarse mediante proceso ordinario por cuanto en el proceso principal no hubo pronunciamiento al respecto; que de conformidad con lo anterior, le asiste derecho a que en este proceso ordinario se reconozca los intereses moratorios e indexación de la manera como fue solicitado en las pretensiones de la demanda.

1.1. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí mediante auto del 12 de octubre de 2018 (fol. 94), ordenando su notificación y traslado a la accionada.

La Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., contestó la demanda el 07 de octubre de 2019 (Fols. 126 a 144), oponiéndose a las pretensiones enarboladas con fundamento en que operó la cosa juzgada, ya que lo relativo al reconocimiento de pensión de sobrevivientes fue objeto de decisión judicial en el proceso con radicado No 05360-31-05-001-2007-00433-00, aunado a que, el reconocimiento y pago de la prestación reconocida judicialmente se cumplió el 04 de septiembre de 2017 con el pago de \$ 60.458.717 por concepto de retroactivo, más \$ 9.965.868 por costas procesales, sin que quede pendiente el pago de obligaciones establecidas en la decisión judicial; que de igual manera, se inició por el actor proceso ejecutivo laboral, el cual terminó con pago total de la obligación y archivo del mismo mediante auto del 21 de septiembre de 2018. Como excepciones de mérito propuso las que denominó cosa juzgada, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción, pago, y compensación.

Mediante auto del 21 de octubre de 2019 (Fol. 163) se tuvo por contestada la demanda por parte de PORVENIR S.A.

1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 29 de octubre de 2019 (Fols. 1 a 4 Expediente escaneado con el No 15, con audiencia), con la que la cognoscente de primer grado declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, y condenó a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la demandante la suma de \$ 47.796.317, por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, causados a partir del 14 de agosto de 2015 y hasta el 03 de septiembre de 2017; declaró probado las demás excepciones propuestas; la absolvió de las demás pretensiones; impartió condena por la indexación, y la gravó en costas procesales.

1.3. APELACIÓN

La determinación adoptada en primera instancia, fue recurrida en apelación por el apoderado judicial de la parte demandada, quien manifestó que debe declararse probada la excepción de cosa juzgada, dado que en anterior proceso ordinario se había resuelto todas y cada una de las pretensiones solicitadas, y una vez agotada todas las etapas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, se resolvieron las pretensiones relativas a la pensión de sobrevivientes, sin que sea de recibo nuevamente ventilar un nuevo proceso judicial, máxime cuando el proceso finalizó con archivo del proceso ejecutivo por pago de la obligación; que en caso de no declarar la cosa juzgada, se debe revisar la prescripción, puesto que han pasado más de 3 años sin haber ejercido reclamación de los intereses moratorios, pues la prestación se causó en el año 2007, teniendo solo hasta el año 2010 para reclamar el derecho; que la demandante solo reclama los intereses moratorios 10 años después, aspecto que lleva a declarar la prescripción de manera total y no parcial como lo hizo la a quo.

El apoderado judicial de PORVENIR S.A. aportó oportunamente alegatos de conclusión en los que se opone a la condena de reconocer y pagar los intereses moratorios en favor de la actora, ya que fueron objeto de un proceso anterior, por lo que en el presente asunto las tres condiciones que establece la norma para la configuración de la excepción de cosa juzgada se encuentran acreditados, además es claro que el afiliado fallecido no cumplía la densidad de cotizaciones necesarias para generar pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.

Por su parte, el apoderado judicial de LILIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA en los alegatos de conclusión solicita confirmar y modificar favorablemente el fallo de primera instancia, revisando la prescripción, atendiendo el principio legal que rige en materia laboral de fallar ultra y extrapetita en favor de los derechos y garantías de los trabajadores y demandantes en el proceso laboral.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1 PROBLEMA JURÍDICO:

Versa el punto neural del debate en resolver:

¿Si en el presente proceso se configura o no el efecto impeditivo de la cosa juzgada en relación con la pretensión de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? En caso negativo ¿Si operó el fenómeno de la prescripción para reclamar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas pensionales causadas entre el 5 de marzo de 1999 y el 30 de junio de 2010?

2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **MODIFICATORIO**, siguiendo la tesis según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 303 del Código General del Proceso, no se configura la excepción de cosa juzgada, así como tampoco la excepción de prescripción total sino parcial de la obligación respecto de los intereses moratorios causados con anterioridad al 18 de septiembre de 2015, dando lugar a modificar la condena y ordenando su indexación, sin que sea esta última condena incompatible con los intereses moratorios, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1 COSA JUZGADA - INTERESES MORATORIOS

No es objeto de controversia los siguientes presupuestos fácticos: Que mediante oficio del 21 de junio de 2006, HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A. le negó la pensión de sobrevivientes a la demandante LILIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA (Fols. 13 a 19), lo que generó el inicio del proceso ordinario laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, despacho que mediante sentencia del 14 de agosto de 2009, condenó a Horizonte, hoy Porvenir S.A., al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora en calidad de compañera permanente, desde el 08 de noviembre de 2005 (Fols. 20 a 31); que el Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín, Sala Décima de Decisión Laboral, mediante sentencia del 19 de marzo de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia (Fols. 32 a 41); que se interpuso recurso extraordinario de casación y el mismo fue resuelto mediante sentencia SL14987-2016, radicación No 46408 del 10 de agosto de 2016, en la cual se dispuso no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (Fols. 46 a 54); que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí mediante auto del 29 de agosto de 2017 libró mandamiento de pago en lo relacionado con la obligación de reconocer la pensión de sobrevivientes desde el 08 de noviembre de 2005, negando el mandamiento de pago en lo relacionado con los intereses moratorios (Fols. 1 y 2 archivo No 2 expediente digital); que mediante providencia del 08 de agosto de 2018 la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la decisión del a quo, en la que no se accedió a librar mandamiento de pago por los intereses moratorios (Fols. 5 a 8 archivo No 2 expediente digital); que PORVENIR S.A. en cumplimiento a la decisión judicial del proceso ejecutivo, consignó la suma de \$ 60.458.717 por concepto de retroactivo de la pensión de sobrevivientes y \$ 9.965.868 por costas procesales (Fols. 145 a 151). Finalmente, se advierte que mediante auto del 21 de septiembre de 2018, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí decidió terminar el proceso por pago total de la obligación, ordenó la entrega de los depósitos judiciales y archivó el expediente. (Fols. 152 a 153).

Sobre la cosa juzgada, viene a propósito colacionar los discurrecimientos de la Corte Constitucional en sentencia C-774 de 2001, al apereibir que para que el instituto de la cosa juzgada pueda ser invocado y declarado, deben concurrir en un mismo proceso tres elementos o requisitos, pues de faltar alguno de estos, no lograría estructurarse, sino que se estaría ante un proceso íntegramente nuevo, a saber: **i) Identidad de objeto**, es decir, *la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente;* **ii) Identidad de causa petendi**, es

*decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa, y **iii) Identidad de partes**, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada”.*

A su vez, en sentencia con radicación N° 49784 del 1º de febrero de 2017, la Corte Suprema de Justicia asentó que: “*para que se predique la existencia de la institución de la cosa juzgada, deben coincidir la identidad: (i) de personas o sujetos, de modo que se trate del mismo demandante y del mismo demandado; (ii) de objeto o cosa pedida, esto es, del beneficio jurídico que se solicita o reclama (no el objeto material), y (iii) de causa para pedir, es decir, el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado”.*

Ahora, en orden a desatar el meollo del asunto, importa resaltar las previsiones del artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por vía de interpretación analógica al procedimiento laboral como lo previene el artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, según el cual para su declaratoria exige que: “*el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad de partes”.*

Bajo los anteriores parámetros, educa la Sala que en el presente asunto se convoca a la misma parte demandada en derredor de los fines perseguidos con el proceso bajo el radicado N° 05360 31 05 001 **2007 00433** 00, fallado en primera, segunda instancia, y en sede de casación según las sentencias obrantes de folios 20 a 56, mismo que da cuenta que la señora LÍLIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA, demandó al otrora HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., con lo que el primer presupuesto configurador de la cosa juzgada se encuentra acreditado; sin embargo, en lo que tiene que ver con la identidad de objeto y de causa petendi no se configura, pues en el proceso ordinario laboral incoado bajo el radicado **2007-00433**, solo fue objeto de pretensión lo siguiente:

“se condene a reconocerle y pagarle los siguientes conceptos:

1.- La pensión de sobrevivientes a que tiene derecho (...).

2.- Las mesadas causadas desde la muerte del señor IGNACIO CUARTAS BEDOYA, ocurrida el 07 de noviembre de 2005, hasta la fecha en que se dicte sentencia con la orden de pago de la pensión de sobrevivientes solicitada.

3.- Lo ultra y extrapetita, conforme a lo aprobado en el proceso.

4.- Costas.”

Ahora, una vez revisadas las decisiones judiciales, en ninguna parte se hace alusión o consideración alguna a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues la discusión jurídica cardinal del proceso judicial se encaminó a resolver sí quien debía asumir la prestación lo era la administradora de pensiones, en este caso HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., o directamente el empleador del causante por no haber efectuado las cotizaciones de manera oportuna al sistema general de pensiones, de hecho la solución jurídica planteada en sede de casación se relacionan con las consecuencias prácticas respecto de la mora del empleador en los aportes pensionales, y la entidad que asume la prestación económica en esos eventos, es decir, no puede sostenerse que la reclamación de intereses moratorios haya sido objeto de discusión por la vía judicial para que opere la cosa juzgada impetrada por la entidad accionada.

Y si bien, en el proceso ejecutivo que inició la actora para el cumplimiento de la decisión judicial, se solicitó que se libre mandamiento de pago por los intereses moratorios, cumple precisar que tal solicitud no fue acogida, por no existir título base de ejecución que lo respalde, vale decir, que no se había impuesto ninguna condena en ese horizonte en el proceso ordinario laboral 2007-00433, lo que conllevaba como bien lo puntualizó la actora a reclamar a través del proceso ordinario tal pretensión.

Es de anotar en este punto, que no puede entenderse que con la reclamación de la pensión de vejez también se deprecó implícitamente el pago de los intereses moratorios, en tanto los intereses moratorios exigen, además del reconocimiento pensional, la declaratoria de que el impago de las mesadas obedeció a un retardo injustificado, a diferencia de otros derechos accesorios a la pensión de vejez que surgen de forma automática con su reconocimiento, como lo sería por ejemplo el pago del retroactivo de la pensión de vejez, con lo cual, desde ya se despacha de manera negativa el punto de inconformidad planteado por el apoderado judicial de PORVENIR S.A. relativo a que la prestación se causó en el año 2007, teniendo solo la actora hasta el año 2010 para reclamar los intereses moratorios, pues como se verá más adelante en el estudio de la excepción de prescripción, lo reclamado para el año 2007, tanto en la vía administrativa como judicial, iba enderezado solo al reconocimiento pensional.

2.2.2. DE LOS INTERESES MORATORIOS.

Al respecto, la Ley 100 de 1993, en el artículo 141 consagró los intereses moratorios como una sanción al incumplimiento de las entidades de seguridad social que, estando obligadas al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, lo dilaten o retarden.

Frente a su causación, ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que: *“los intereses moratorios se causan en el caso de la pensión de sobrevivencia, luego de dos meses a partir de la radicación de la reclamación administrativa, tiempo que tienen las entidades de seguridad social para reconocer la prestación, conforme a lo establecido en el artículo 1.º de la Ley 717 de 2001, que es el precepto aplicable para este tipo de prestación”*(CSJ SL414-2019, CSJ SL1169-2019, CSJ SL5150-2019, CSJ SL1240-2020 y CSJ SL1757-2020).

En cuanto a la fecha en que se hace exigible los intereses moratorios, tiene adoctrinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que:

En efecto, la Sala ha enfatizado que la fecha en que se hacen exigibles los citados intereses no es otra que la del retardo o retraso en el pago de ese beneficio pensional, por lo que se debe precisar que solo es dable hablar de retardo cuando los beneficiarios que se consideran con derecho a una pensión de sobrevivientes han elevado la respectiva solicitud de reconocimiento, que es cuando la entidad de seguridad social ha debido iniciar el trámite para su reconocimiento y su pago y, además de ello, siempre y cuando se haya incumplido con el término establecido en la ley para el reconocimiento de la prestación; mas no desde la fecha de la causación del derecho, porque su otorgamiento no es de oficio sino a petición de parte y porque si la ley ha conferido un plazo para el efecto, no puede considerarse que incurre en un retardo la entidad que cumple su obligación dentro de tal interregno [...].(CSJ SL10022-2015, rad. 44507, reiterada en la CSJ SL16585-2015, rad. 45081)

Igualmente, es oportuno traer a colación las prédicas expuestas en la sentencia SL3130-2020, en la que rememorando la sentencia del 23 de septiembre de 2002, radicado 18512, la Corte Suprema de Justicia instruyó:

[...] el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su

reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios.

Descendiendo al *sub examine*, en efecto una vez acaecido el fallecimiento de IGNACIO CUARTAS BEDOYA (q.e.p.d) el 07 de noviembre de 2005, se presentó la actora a reclamar la pensión de sobrevivientes, tal como consta a folio 13, sin que se tenga registro de la fecha en que procedió a realizar tal petición; no obstante, su solicitud fue despachada de manera negativa a través de oficio datado el 21 de junio de 2006, con fundamento en que al haber realizado el empleador los pagos extemporáneos al sistema integral de seguridad social, debe ser aquel quien responda por la prestación (Fols. 13 a 19), aspecto que consideró el juez de primera instancia en el proceso 2007-00433 como “*un argumento insostenible*” (Fol. 28), y de paso permite a esta Judicatura considerar que los intereses moratorios deprecados en la presente demanda sí se causan, y en línea de principio, operarían a partir del 22 de junio de 2006, día siguiente a la fecha en que la entidad de seguridad social le negó la prestación, ya que no existe registro de la fecha de reclamación del derecho. Pese a ello, como en el proceso 2007-00433 no se elevó pretensión en concreto de reconocimiento y condena a los intereses moratorios como se precisó en líneas anteriores, y solo se formula tal pretensión con la presentación de la demanda judicial por la que se procede (18 de septiembre de 2018 - Fol. 9), se tendrá tal fecha como reclamación del derecho para efectos de la prescripción, y no el 14 de agosto de 2018 (Fol. 12), como lo consideró la a quo, puesto que esta última solo corresponde al sello de presentación personal del poder.

En ese contexto, la anterior fecha es relevante en la medida en que determina el hito inicial en el cual se empieza a generar los intereses moratorios, producto del estudio de la excepción de prescripción, como más adelante se detallará, habida cuenta que constituye una de las consecuencias jurídicas adversas a la reclamante por no haber formulado la pretensión de condena por los intereses moratorios en el proceso 2007-00433.

2.2.3. DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Al respecto, establecen los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el término de prescripción de las acciones laborales de tres años contados a partir de que la obligación se hizo exigible, la que se puede interrumpir por una sola vez presentando la condigna reclamación por escrito o demanda judicial, según el caso.

Resulta pertinente traer a colación lo delineado por la Corte Constitucional en sentencia C-227 de 2009, en la que, al analizar la figura de la prescripción y las cargas procesales

“En criterio de la Corte Suprema de Justicia que ha sido acogido por esta Corporación, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la demanda de sus derechos en un término procesal específico, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos señalados”.

Así pues, en punto a resolver o de fijar de manera adecuada el hito inicial a partir del cual corren los intereses moratorios, baste traer a colación a manera de ejemplo las consideraciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL1639-2019, en la que avala la posición sostenida por el juez ordinario en punto a la manera como determinó el momento en que operó los intereses moratorios producto de la prescripción, a saber:

*«[...] teniendo en cuenta que la primera reclamación pensional se elevó el 3 de octubre de 2013 (folio 5), el término máximo para resolver era de dos meses, y se extendía hasta el 3 de diciembre de 2013, pues así lo prevé el artículo 1.º de la Ley 717 de 2001, lo que daría lugar a imponer los intereses a partir del 4 de diciembre de 2013, y hasta cuando se hiciera efectivo el pago del retroactivo adeudado como lo fija la a quo»; sin embargo, precisó que como «la reclamación de los aludidos intereses se elevó **por primera vez el 6 de febrero de 2018** (folio 19), en cuanto a la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones al contestar la demanda, se encuentran prescritos los intereses moratorios anteriores **al 6 de febrero de 2015**; en efecto los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 surgen abantes (sic) sobre el valor de las mesadas, a partir del 6 de febrero de 2015 y deberían correr indefinidamente y hasta el momento en que se hiciera efectivo el pago del retroactivo generado y que debió pagarse completo entre el 13 de abril al 31 de julio de 2013, y entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2014, pues a partir del 1.º de julio de ese mismo año, se procedió al pago de la mesada pensional por parte de Colpensiones; [...]».*

Así las cosas, no es equivocada la posición que asumió la cognoscente de instancia en

relación con declarar probada parcialmente la excepción de prescripción en el presente proceso, pues ciertamente los intereses moratorios se causaron desde el año 2005, pero como solo con la presentación de la actual demanda (18 de septiembre de 2018) se solicita el reconocimiento de los susodichos intereses, se encuentran prescritos los intereses moratorios anteriores al 18 de septiembre de 2015, aspecto que lleva a modificar la sentencia de primer grado, pero solo respecto a esta fecha prístina, debido a que la a quo tomó como referente la fecha de presentación de la demanda el 14 de agosto de 2018, siendo que ello se itera es el sello de presentación personal del poder.

La liquidación de los respectivos intereses moratorios, se hará sobre el valor de las mesadas pensionales estipuladas en la documental de folios 147 a 151, esto es, en cuantía de un SMMLV y con 14 mesadas pensionales al año, puesto que tal asunto no forma parte de la presente *litis*, y teniendo en cuenta el interés bancario corriente del 21.48 %, vigente para el mes de septiembre del año 2017, según lo dispone la Superintendencia Financiera de Colombia, y se liquidará hasta el 04 de septiembre de 2017, fecha en la que la entidad encartada pagó el retroactivo a la actora por valor de \$91.088.806,33, que corresponden a las mesadas del 08 de noviembre de 2005 hasta el 31 de agosto de 2017.

Una vez realizados los cálculos matemáticos de rigor, a esta Sala le arroja una suma de **\$44.906.051**, por concepto de intereses moratorios generados desde el 18 de septiembre de 2015 hasta el 04 de septiembre de 2017, sobre las mesadas pensionales causadas del 8 de noviembre de 2005 hasta el 31 de agosto de 2017, según tabla de Excel con que se glosa la sentencia, y por ende, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en este ítem.

En consonancia con lo anterior, se confirmará el reconocimiento de la indexación, a juzgar por la mengua del derecho objeto de condena ante el hecho notorio de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, y la misma debe ser asumida por quien debe realizar el pago, en este caso, PORVENIR S.A., sin que sea dable analizar su proceder de buena o mala fe en el presente asunto, debido a que la indexación no es una sanción al deudor, sino un mecanismo para resarcir al acreedor por efectos de la depreciación monetaria.

Finalmente, cumple relieves que no se está ordenando la indexación e intereses moratorios sobre un mismo concepto, pues allí sí operaría la incompatibilidad, debido a que lo que aquí se ordena es la actualización de la suma de dinero por concepto de intereses moratorios, y tal indexación va desde el 05 de septiembre de 2017 hasta el momento en que se haga el pago efectivo de los \$ 44.906.051, aspecto que también ha

sido objeto de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, como puede extraerse de la sentencia SL4942-2020, en los siguientes términos:

De otro lado, se ordenará la indexación de los mentados réditos, dado que es necesario compensar el efecto inflacionario que sufre el valor de los mismos por el transcurso del tiempo; sin que ello implique una doble actualización de la moneda, pues lo que aquí se persigue es la corrección monetaria de una deuda, en el presente asunto representada por el valor de unos intereses, que se causaron y liquidaron hasta febrero de 2009, pero que han de pagarse efectivamente 11 años más tarde.

Colofón de lo anterior, sin que haya más puntos que resolver, lo procedente es impartir confirmación de la sentencia de primer grado en lo referente a la causación de los intereses moratorios, modificándola en cuanto al valor objeto de condena, de conformidad con los parámetros atrás esbozados.

2.2. COSTAS

Frente a la AFP del RAIS accionada y apelante, se impondrá condena en costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., fijándose como agencias en derecho la suma de \$ 908.526 correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente y a favor de la parte demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación impetrado. Las de primera instancia se confirman.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia materia de apelación, proferida el 29 de octubre de 2020 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, el cual quedará así:

*“**SEGUNDO:** Se **CONDENA** a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a LÍLIAM DEL SOCORRO FONNEGRA MESA la suma de **\$44.906.051**, por concepto de intereses moratorios causados del 18 de septiembre de 2015 al 04 de septiembre de 2017, sobre las mesadas pensionales causadas entre el 8 de noviembre de 2005 y el 31*

de agosto de 2017, según y conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.”


SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia materia de apelación.


TERCERO: CONDENAR en **COSTAS** en esta instancia fijándose como agencias en derecho en favor de la demandante y a cargo de PORVENIR S.A., el equivalente a un (1) SMMLV, esto es, la suma de \$ 908.526. Las de primera, se confirman.


Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

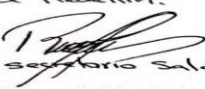

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial
Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.


Secretario Sala Laboral

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 45** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 15 de marzo de 2021, y pueden consultarse en <https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario